

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS (SECEM) SOBRE EL CONTROL DE DEPREDADORES

En enero de 1999 la Asamblea General de la SECEM aprobó, a propuesta del Grupo de Carnívoros Terrestres (GCT), un documento en el que se detallaban las “Recomendaciones de la SECEM ante el control de poblaciones de carnívoros”. Ha transcurrido más de una década desde entonces y el control de depredadores continúa generando polémica. Los recientes cambios legislativos, tanto nacionales como autonómicos, tampoco han ayudado a resolver las dudas existentes en cuanto a su aplicación y criterios. Conscientes de ello, la Junta Directiva de la SECEM redactó un nuevo documento a modo de actualización de dichas recomendaciones. Esta nueva propuesta fue remitida a los socios de la SECEM y debatida en el transcurso de una sesión específica que tuvo lugar durante las IX Jornadas de la SECEM (Bilbao 2009). Fruto de ese debate y con las propuestas y sugerencias recibidas posteriormente, se ha redactado un nuevo documento que ha sido aprobado por la Junta Directiva de la SECEM en la reunión celebrada el 18 de junio de 2010.

Antecedentes

El control de depredadores ha sido, en nuestro país, una herramienta tradicional de gestión habitualmente ligada a la actividad ganadera pero también a la cinegética. Su uso indiscriminado es reconocido como una de las causas de desaparición de ciertas especies de carnívoros en amplias zonas de España durante la segunda mitad del siglo XX; también poblaciones de aves rapaces, especialmente del grupo de las necrófagas, se vieron sensiblemente mermadas por este control. Esta situación de acoso a los depredadores se ha repetido igualmente en otros países de nuestro entorno; así, especies como el gato montés, el lince ibérico, el lobo o el oso, entre los carnívoros, son ejemplos de un escenario de persecución más o menos extendida.

A partir de la década de 1970, la aplicación de medidas de conservación que incluyen la protección estricta de la mayoría de las especies así como la prohibición de su captura y el uso de los métodos de trampeo no selectivos, junto a otras políticas ambientales de conservación de los ecosistemas naturales, han permitido cierta recuperación de algunas de estas especies.

Los cambios acontecidos en la sociedad española durante las últimas décadas (reestructuración de los sectores económicos, alternativas de ocio entre la población rural, aparición de usos turísticos alternativos -ecoturismo, turismo rural...-, profesionalización del sector primario, incremento de la sociedad urbana en detrimento de la rural y, sin duda, el aumento de la sensibilidad por los problemas del medio ambiente) han supuesto una reducción de las prácticas relacionadas con el control de depredadores. En la mayoría de los pueblos ha desaparecido la figura del alimañero, no teniendo ya sus actividades continuidad generacional.

Pese a ello, la persecución de ciertas especies de carnívoros, sobre todo en zonas con relevante riqueza cinegética, continúa bajo el amparo legal de autorizaciones

administrativas de carácter excepcional. Los textos legales aprobados por los diferentes parlamentos autonómicos en España han recogido en sus articulados las prohibiciones a que obligaban las directivas de la Unión Europea y los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado español. Así, se ha ido prohibiendo el uso de métodos masivos y no selectivos de captura, entre los que se incluyen los venenos, los lazos, los cepos... Sin embargo, en todas estas legislaciones (leyes de conservación de la fauna y leyes de caza) figuran excepciones a la normal general de prohibición o bien indeterminaciones de carácter práctico sobre la selectividad de los métodos de control (jaulas, lazos con topes, etc.).

De todas formas, el concepto de control de depredadores no queda expresado claramente en la legislación. Casos recientes como la Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres del Parlamento Andaluz y el Decreto 182/2005 por el que se aprueba el reglamento de ordenación de la caza en Andalucía, y sobre todo la Ley 42/2007 del patrimonio natural y de la biodiversidad, son excepciones a esta falta de definición.

Así pues, este marco normativo puede quedar desprestigiado si los legisladores no invierten los recursos necesarios para su aplicación efectiva, o bien se cae de nuevo en la pérdida del criterio de excepcionalidad que esta medida requiere. La realidad es que el control de depredadores, que debería de ser una situación de excepcionalidad y contar con una autorización administrativa justificada y motivada, se convierte en la práctica, en tantas ocasiones, en un mero trámite sin la consideración que la norma requiere. Más aún, bien por la falta de conocimientos tradicionales y prácticos sobre los métodos de captura efectivos por parte de las personas que lo solicitan, bien para evitar la burocracia administrativa y su control, se decide utilizar métodos ilegales (venenos) o actuar sin autorización. El uso de venenos como método de control se ha vuelto a generalizar en muchas zonas de España. Si bien la finalidad primera era controlar los depredadores para conseguir un mayor rendimiento cinegético por parte de los gestores de los terrenos, durante los últimos años se está relacionando con otras actividades como la ganadería.

En todo caso, el control de depredadores con métodos selectivos y sujeto a autorizaciones y seguimiento administrativo, se encuentra recogido en planes o programas relacionados con la conservación de especies amenazadas. La *Estrategia contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados*, la *Estrategia para la Conservación del Águila Imperial* y la *Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico* recomiendan disponer de este tipo de autorizaciones para evitar la proliferación del uso de venenos. En todos estos documentos se recalca que estas actuaciones han de ser supervisadas por las Administraciones competentes y realizadas por personal cualificado.

Estas situaciones, tanto las legales con autorización como las ilegales, generaron en los últimos años una situación denunciada por los grupos de defensa de la naturaleza y por científicos de la biología de la conservación. Al igual que estos grupos, la SECEM definió su postura mediante el documento, *Recomendaciones sobre el control de depredadores*. En dicho documento se valoraba objetivamente la posición ecológica de los carnívoros en el ecosistema y se hacía hincapié en utilizar estrictamente el criterio de excepcionalidad en el control de especies de carnívoros no amenazadas, utilizando métodos no selectivos que, en todo caso, debían ser abordados por profesionales con suficiente formación en el empleo de los métodos de captura y en la manipulación de los animales capturados. La SECEM entiende, además, que de forma puntual ciertas actividades en el medio rural pueden entrar

en conflicto con algunas especies de la fauna salvaje y, por lo tanto, asume la excepcionalidad que las legislaciones ya recogen.

La Ley 42/2007 es básica y por lo tanto de aplicación en todo el territorio del Estado, y habrá de transponerse y aplicarse en las legislaciones autonómicas y en las normativas y reglamentos que se deriven. En el artículo 62.3 de dicha Ley se marcan los criterios para la aplicación de la metodología sobre el control de depredadores en relación a la gestión cinegética (motivo más generalizado para su autorización) cuando se considere necesario su uso. También se dan en esta Ley directrices para el control de especies que pueden estar catalogadas. Los criterios para esta normalización se basan en el uso de métodos selectivos y que aseguren el bienestar de los animales capturados, garantizado por un sistema de homologación previa y por el hecho de que el control lo lleve a cabo personal acreditado y con formación suficiente en el manejo de la fauna.

En todo caso y pese a esta novedad legislativa, no se especifican los criterios para autorizar esta medida. En definitiva, se intenta reducir su aplicación al imponer una metodología más restrictiva, pero sin poner en duda la necesidad de realizar el control de depredadores.

Desde la fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley, ninguna administración con competencias en la materia ha desarrollado este articulado. Así, no hay reglamento que clarifique el grado de selectividad, el grado de bienestar animal, el organismo oficial que homologue los mecanismos de captura, los criterios de homologación y las pruebas que se han de superar, o la formación necesaria y la forma de acreditar al personal autorizado. Esto, en la práctica, significa que o se están autorizando métodos de captura no legales, o no se está autorizando el control de depredadores por la ausencia de garantías legales.

En los últimos años el sector cinegético está avanzando posiciones en la reivindicación del control de predadores, impulsando documentos como el manual '*Especialista en control de depredadores*' de la Escuela Española de Caza, dependiente de la Federación Española de Caza, o la organización de sesiones formativas. Un ejemplo de ello fue la celebración en Madrid, en diciembre de 2008, del *Congreso Internacional de Trampeo* (organizado por la Comunidad de Madrid), donde se llegaron a presentar iniciativas ilegales en el marco legal europeo por parte de ponentes invitados y con conclusiones alejadas del objetivo de las jornadas (los métodos de captura); estas conclusiones, que se expusieron en un debate final, se acercaron en algún momento a la idea de realizar el control de depredadores sin el criterio de excepcionalidad, planteamiento contrario a lo que la normativa quiere recoger.

Recomendaciones de la SECEM

Ante esta situación la SECEM considera que:

- ✓ La depredación es un fenómeno natural que recoge la ecología de poblaciones, que viene regulada por múltiples factores y que resulta por ello un proceso complejo cuya alteración puede producir cambios imprevisibles en el ecosistema.
- ✓ La existencia de una comunidad de depredadores bien estructurada es un indicador de alta biodiversidad y buena conservación del ecosistema. Esta estructura se completa cuando los depredadores son a su vez depredados por especies super-depredadoras.

- ✓ Entre las especies de vertebrados, las legislaciones europea y española catalogan a la mayoría de especies de carnívoros, y a todas las aves rapaces y reptiles, como protegidas, reconociendo así la importancia que tienen en los ecosistemas naturales. El control de depredadores autorizado se centra por lo tanto en las pocas especies que no están catalogadas, muchas de ellas clasificadas como generalistas por sus requerimientos ecológicos. El efecto del control de los depredadores sobre una parte de la comunidad resulta por tanto poco efectivo, a la vez que altera de forma imprevisible los equilibrios entre especies en el ecosistema.
- ✓ La efectividad del control de depredadores se ha estudiado en diferentes ecosistemas y especies. Con frecuencia, los resultados están muy alejados del objetivo que se pretende conseguir: reducción de la mortalidad de las especies presa al reducir la abundancia de una o más especies de depredadores. Las consecuencias indirectas y comprobadas de estos controles son, entre otras: el aumento de otras especies de depredadores al relajarse la competencia por los recursos, la pérdida de capacidad de control natural de epizootias en las especies-presa y el aumento de la abundancia de la especie objeto del control (por relajación de territorialidad, aumento de la productividad...).
- ✓ La aplicación del control de depredadores ha de ser una excepción a la norma y como tal autorizado exclusivamente en ocasiones puntuales justificadas y motivadas. Llegados a esta solución última, los métodos han de estar homologados por una agencia u organismo certificador, según criterios de selectividad y de bienestar animal. Además, el personal autorizado ha de tener una formación suficiente que profesionalice esta actividad, evitando accidentes o interpretaciones de la norma.
- ✓ Pese a las novedades normativas que regulan la selectividad de los métodos y el bienestar de los animales capturados, no hay ninguna regulación respecto a la forma de sacrificio de los ejemplares, objetivo final de estas autorizaciones. Se ha de impulsar una regulación que asegure la aplicación de métodos de eutanasia compatibles con los criterios de bienestar animal.
- ✓ Las administraciones competentes en materia de caza deben impulsar criterios de gestión que tengan en cuenta la comunidad de depredadores en el marco del ecosistema de los terrenos de caza: fomentar la gestión de las poblaciones de especies cinegéticas sin tener que manipular a las especies de depredadores. En la mayoría de las legislaciones de caza españolas, los titulares de terrenos de caza tienen la concesión de los derechos de caza de las especies cinegéticas en sus límites, y pueden realizar su aprovechamiento ordenado y planificado. Esto no significa, de forma general, que se deban capturar otras especies que convivan naturalmente en ese espacio, bajo el argumento de que los depredadores reducen el potencial cinegético del terreno. El gestor debe trabajar con las especies autorizadas a cazar. Se recomienda hacer un balance real de los recursos cinegéticos de cada terreno considerando la inclusión de las pérdidas naturales que provoca la depredación. La base de la justificación de realizar el control de depredadores en terrenos cinegéticos es por daños a la fauna cinegética. Los gestores de los terrenos cinegéticos no son propietarios de los ejemplares de las especies de caza; tienen el derecho a gestionar su caza, y una vez cazadas, las piezas son de su propiedad o de los cazadores a los que han permitido cazar. No hay por tanto

daño posible sobre propiedades que no existen (no sería, por ejemplo, el caso de daños sobre el ganado).

- ✓ Se recomienda gestionar el balance de pérdidas a través del control de la depredación, más que de los depredadores, valorando otras herramientas y técnicas de gestión de las poblaciones y de los hábitats:
 - Crear hábitats-refugios para las especies presa: cobertura vegetal, reducción de la fragmentación y alternancia de cultivos, entre otros, que permitan una defensa pasiva frente a los depredadores.
 - Evitar las repoblaciones sin una planificación técnica suficiente que garantice los objetivos de la misma, asegurando el origen de los ejemplares, las garantías sanitarias, la adecuación del hábitat, las condiciones de adaptación, la ausencia de actividad cinegética, etc.
 - Evitar las liberaciones de ejemplares durante la temporada de caza.
 - Evitar y controlar la proliferación de fuentes alternativas de alimento para los depredadores generalistas (basureros, granjas, zonas residenciales, etc.).